PERIODO
PRESIDENCIAL
006803
ARCHIVO

MINUTA SOBRE SITUACION DE PRESOS POLITICOS

- 1.- Al 11 de Marzo de 1990, existían en el país 348 presos políticos, de los cuales 305 se encontraban con procesos en tramitación, y 43 cumpliendo condenas.

Al 28 de Marzo del presente año, el número de presos políticos se redujo a 202 personas, de los cuales 184 se encuentran con procesos pendientes, y sólo 18 están condenados.

Como se podrá apreciar en el transcurso de un año de gobierno, la cifra inicial ha sido reducida aproximadamente en un 42%.

- 2.- En el mismo período señalado, el Gobierno ha dictado decretos de indulto que han beneficiado a 85 presos políticos, correspondientes a alguno de los 43 casos con condena existentes a Marzo de 1990, y otros que fueron condenados en el período.
- 3.- Es necesario recordar que el indulto presidencial, no puede beneficiar a personas que esten actualmente sometidas a procesos por parte de los Tribunales de Justicia, y hasta el día 1º de Abril recién pasado, a quienes, no obstante encontrarse condenados mediante sentencia ejecutoriada, lo estuvieran por infracción a la Ley Nº18.314 que sanciona conductas terroristas.

Esta última situación varió recientemente, con la publicación el pasado día 1º de Abril, de la Ley Nº 19.055 que introduce reformas a la Constitución Política, entre las que se encuentra la facultad otorgada al Presidente de la República, para indultar a personas condenadas por conductas terroristas, respecto de hechos cometidos antes del 11 de Marzo de 1990.

- 4.- Conforme a la Reforma Constitucional señalada, el Presidente de la República ha quedado facultado para pronunciarse respecto de las solicitudes de indulto de personas condenadas por infracción a la Ley Antiterrorista, que por ahora,

sólo sería potencialmente beneficioso para las 18 personas que están cumpliendo condenas, toda vez que los restantes 184 presos políticos, aún están sometidos a proceso por los Tribunales.

- 5.- Por otra parte, en cumplimiento del Programa de Gobierno, a pocos días de asumir las nuevas autoridades en Marzo de 1990, el Ejecutivo envió al Parlamento un conjunto de Proyectos de Ley (denominados "Leyes Cumplido"), los cuales hace algunas semanas fueron parcialmente aprobados por el Poder Legislativo. Las reformas legales mencionadas, permitirán un cambio cualitativo en la situación de los presos políticos, en situaciones tales como:
- a) Traspaso de causas desde la Justicia Militar a la Judicatura Ordinaria, poniéndose término al juzgamiento de civiles por parte de Tribunales Castrenses en todos los casos de infracción a la Ley Antiterrorista, y en determinadas situaciones de dilación excesiva en los procesos por infracción a la Ley de Control de Armas, de Seguridad del Estado y del Código de Justicia Militar. En las últimas semanas se ha comenzado a producir este traspaso de procesos.
 - b) Establecimiento de plazos para la dictación de la sentencia de término, poniéndose fin a situaciones abusivas, que se produjeron en procesos, algunos de los cuales permanecieron abiertos por espacio de varios años.
 - c) Delimitación del concepto de delito terrorista, permitiendo una clara distinción entre estos y los delitos estrictamente políticos o ideológicos.

Otros aspectos de estas reformas legales son los siguientes:

- a) Supresión de la pena de muerte para numerosos casos de delitos contemplados en el Código Penal, de Justicia Militar, Ley de Seguridad del Estado y de Control de Armas. El proyecto gubernamental apuntaba a la supresión completa de la pena de muerte, pero el Senado votó la mantención de dicha sanción para casos de graves delitos.

- b) Mecanismos para garantizar de mejor forma derechos esenciales, tales como la asistencia de abogados al detenido en recintos policiales o carcelarios, obligaciones de parte del Juez para evitar la práctica de la tortura, normas sobre el beneficio de la libertad provisional a los procesados, etc.
- 6.- Cabe finalmente señalar, que bajo la denominación de presos políticos, existe una heterogeneidad de situaciones personales y de infracciones legales, que no resulta posible considerar como un conjunto indivisible.

En efecto, los ilícitos penales en virtud de los cuales se ha producido el procesamiento de los presos políticos, comprende situaciones tan disímiles como ingreso ilegal al país por parte de personas que se encontraban afectas a prohibiciones administrativas dispuesta por el Gobierno Militar, hasta graves delitos como atentados contra personal de las Fuerzas Armadas o Carabineros causando la muerte o lesiones graves, además de otras situaciones tales como tenencia ilegal de armas, pertenencia a grupos armados, colaboración o "ayudista" de los mismos, etc.

Esta heterogeneidad de situaciones, se traduce -al momento de resolver una solicitud de indulto-, en difíciles decisiones en los casos más graves. Sólo por vía de ejemplo se puede mencionar la situación del preso J.P.D., que se encuentra condenado a presidio perpetuo, más una condena de 20 años, 4 condenas de 18 años, 1 condena de 10 años y una condena de 3 años, por su participación en el atentado con resultado de muerte del Intendente de Santiago ocurrido en el año 1985, atentado a un carabinero de guardia en el domicilio de un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, sustracción del arma de servicio al policía, robo a mano armada a un taxista para sustraerle su automóvil, 3 asaltos a mano armada en diversos locales comerciales, intento de incendio a un local de Cema Chile en 1983, y otros 2 robos con violencia de vehículos particulares. Enfrenta además, 3 procesos pendientes por infracción a la Ley de Control de Armas y al Código Penal.

Una situación similar es la que enfrenta H.M.M., quien está condenado a cadena perpetua, a 4 condenas de 18 años de presidio, 2 condenas a 10 años y una última a 5 años, por su participación en la muerte de un General de Ejército, 5 delitos de robo con violencia e intimidación en las personas, robos de vehículos, incendio, y tenencia ilegal de armas fuego.

Otro caso es el de R.C.M., condenado a 2 presidios perpetuos, dos condenas de 10 años y una a 3 años, por su participación en la muerte de 3 efectivos de la Policía de Investigaciones que escoltaban a un General de Ejército, en una emboscada realizada con el propósito de atacar contra dicho Oficial, un atentado frustrado contra una Mayor de Carabineros a la salida de su domicilio, quien resultó gravemente herida con secuelas que se mantienen hasta el día de hoy, sustracción de su arma de servicio, robo de un vehículo que fue utilizado en el año 1981 en un frustrado atentado contra la vida del Presidente de la Corte Suprema, hecho en el cual este preso también participó, enfrentando además, 4 procesos que aún no se fallan.

Santiago, Abril de 1990.